

EL PRD: entre el retroceso y la rectificación

IGNACIO PINACHO

A propósito de la elección interna del 16 de marzo

“El moderado es, por naturaleza, democrático; un extremista de izquierdas y de derechas tienen en común el antidemocratismo. No es casual que tanto los extremistas de izquierda como los de derechas desprecien la democracia”

(NORBERTO BOBBIO)

Desde su nacimiento el PRD ha oscilado entre el nacionalismo revolucionario y el socialismo democrático. Sus documentos básicos que le dieron sustento en 1989 estuvieron impregnados por la tradición de la revolución mexicana, muy a pesar de que las izquierdas provenientes del comunismo y del movimiento social ya no se identificaban con ese legado.

Durante varios años existió en su interior una fuerte resistencia para llamarse de izquierda. Fue hasta 1998, en su IV Congreso Nacional donde por mayoría de sus delegados se adoptó el término de izquierda. Más tarde, se adhiere a la Internacional Socialista y al Foro de Sao Paulo, donde participan fuerzas políticas de un corte comunista y revolucionario, distinto a los de la Socialdemocracia de la Internacional Socialista.

Haber dejado de lado los ideales de la Revolución Mexicana por los de la Revolución Democrática y haberse asumido como un partido de izquierda colocó al PRD, nuevamente, en una nueva disyuntiva: ser un partido democrático o ser un partido revolucionario. En su nombre lleva la contradicción. El partido más importante de la izquierda en México se debate entre las posiciones rupturistas y posiciones reformadoras.

Un viejo debate

En la medida que el PRD no supere la dicotomía reforma-revolución, en esa medida seguirá cargando con una lápida que no le permitirá desarrollarse como un partido democrático.

La gran mayoría de fuerzas de izquierda que durante los 70's y principios de los 80's sostenían la vía armada para acceder al poder, fueron protagonistas decisivos en la formación del PSUM, PMS y el PRD. Su decisión de ser parte de una nueva formación política pluriclasista y comprometida con la vía pacífica y constitucional para conquistar el poder, fue un salto cualitativo de relevancia histórica. Empero, como se ha visto a lo largo de dos décadas, la izquierda aún sigue padeciendo lo que Carlos Pereyra señaló en los albores de 1988: “En un país donde las fuerzas sociales actúan (con pocas excepciones) a través de canales institucionales, cualquiera sea su grado actual de mediación, burocratización e inoperancia, la estrategia de confrontación y la agudización de contradicciones se vuelven inevitablemente formas de vanguardismo incapaces de poner fin al aislamiento histórico de la izquierda socialista respecto del movimiento social” (Carlos Pereyra. Sobre la Democracia. Cal y Arena. Enero de 1987).

Además, siendo el PRD fuerza gobernante en municipios muy importantes del país se alentaban movimientos que rayaban en la ilegalidad, sin deslindarse plenamente de los grupos armados como el EZLN y el EPR. En la práctica se reivindicaba la utilización de las diversas formas de lucha para derrocar al partido de estado. La transición a la democracia no se concibió como un proceso gradual, a través de pactos y acuerdos, como venía sucediendo en la mayoría de países latinoamericanos.

Se dejó la vía de las armas pero se insistió (y se insiste) en la movilización popular y la agudización de las contradicciones para derrocar al gobierno en turno. “El PRD debe impulsar una estrategia de lucha basada en la resistencia civil pacífica y la combinación de diversas formas de lucha desde diversos frentes de acción. Ello significa combinar la movilización social con la lucha electoral e institucional... Debe haber una correcta combinación entre la movilización social y la participación institucional, sin supeditar ni suplantar una a la otra ni desvincularlas entre sí. La movilización social representa la forma principal para acumular las fuerzas que eviten la consolidación del proyecto panista. Los tiempos y la aplicación de las diversas formas de lucha estarán marcadas por la coyuntura. La acumulación de fuerzas debe darse a partir de la relación dialéctica entre movilización social y lucha institucional” (Resoluciones del X Congreso Nacional del PRD).



Alejandro Caballero

Por ello, no es de sorprenderse que el perredismo siga oscilando entre estas dos grandes vertientes políticas: los que asumen como principal vía de lucha la movilización popular, la resistencia civil y el bloqueo de las instituciones (huelga legislativa y el no reconocimiento del ejecutivo federal), y los que sin deslindarse plenamente de esta vía consideran la necesidad del diálogo, los acuerdos y las reformas. Los primeros, al viejo estilo estaliniano, acusan a los segundos de traidores; los segundos no dejan de defenderse pero no van al fondo del debate: o se es un partido democrático, constitucional, comprometido con las instituciones, la paz y el derecho o no.

Prominentes dirigentes siguen pensando como valedera la necesidad de combinar la lucha parlamentaria con la lucha en la calle, incluidos algunos moderados, sin resolver el fondo del debate. De una forma muy acertada Roger Bartra lo plantea así: “Una cosa es comprobar que toda sociedad genera, en mayor o menor medida, movimientos populares y otra cosa muy diferente es alimentar una política permanente de estímulo y convocatoria de protestas masivas. Una izquierda democrática debe ser receptiva ante los movimientos sociales, pero no puede usarlos constantemente para lograr mediante presiones lo que no logra gracias al voto, el convencimiento o las alianzas.” (Fango sobre la democracia. Edit. Planeta).

Esa relación clientelar y corporativa entre los movimientos y el partido le dio al traste al planteamiento original del mismo. Esa idea de abrir el partido a la sociedad se convirtió en un coloso con sobrecupo donde en el afán de estar en primera fila y estar en el juego, se colaron infinidad de personajes y liderazgos de nula reputación. La mejor presencia que puede lograr un partido es por su congruencia y la viabilidad de sus propuestas. No hay razón histórica que nos asista.

Moderación o intransigencia

En las fuerzas y corrientes que actualmente impulsan las candidaturas a la presidencia del partido, en particular la de Alejandro Encinas y la de Jesús Ortega coexisten ambas visiones, siendo mayoritaria la visión de la intransigencia en la fuerza que impulsa al primero, aunque también es apoyado por posiciones moderadas como las que sostiene Amalia García y Manuel Camacho Solís; y es de admirar, desde luego, la conversión de Encinas, de ser un viejo comunista moderado y racional ha pasado a abrazar las posiciones de la primera vertiente política. Aunque podríamos dudar si es por convicción o por conveniencia.

Existen antecedentes muy importantes que se dieron en la década de los 90´s, respecto a si táctica y estratégicamente era correcto pactar o no con el gobierno un proceso de reformas, y

dejar a un lado lo que algunos llamaron como la intransigencia democrática (no a los acuerdos). Este debate inició como producto de los malos resultados para el PRD en las elecciones de 1991 y, posteriormente, de los resultados de la elección de Ernesto Zedillo como presidente de la República.

A nivel federal Porfirio Muñoz Ledo, en su carácter de senador de la República, tentó el terreno de la negociación, sin llegar a darse, en una visita intempestiva a los Pinos y diálogo con Carlos Salinas. En el Distrito Federal el debate fue abierto por la Corriente de la Reforma Democrática (encabezada entre otros, por Pedro Peñaloza y el actual senador René Arce) que proponía la necesidad de pactar un proceso de reformas en la Ciudad de México, que apuntara a la constitución del estado 32 de la República. Quienes gobernaban la ciudad en aquel entonces eran Manuel Camacho Solís y Marcelo Ebrard, este último siendo Secretario de Gobierno. Quienes se oponían al diálogo abierto y público (porque en privado negociaban grandes concesiones para sus organizaciones clientelares) eran, entre otros, René Bejarano y Dolores Padierna.

Producto de la nueva realidad del país y de los acontecimientos del primero de enero de 1994 (el surgimiento del EZLN), el 27 de enero del mismo año se signaron los ocho compromisos por la paz, la democracia y la justicia, avalados por el Consejo Nacional del PRD y su presidente Porfirio Muñoz Ledo, lo que provocó por parte de Cuauhtémoc Cárdenas molestia y rechazo por considerar que los acuerdos eran insuficientes.

La elección de Ernesto Zedillo el 21 de agosto como nuevo presidente de la república, resultado de una copiosa votación, nuevamente colocó al PRD en el cisma de una presunta ruptura. Mientras Zedillo emplazaba a todas las fuerzas políticas a pactar una “reforma electoral definitiva”, Cuauhtémoc Cárdenas hablaba de la instalación de un gobierno de salvación nacional. A contracorriente del ex candidato presidencial el PRD vuelve a signar nuevos acuerdos, el 7 y 13 de enero de 1995, que dieron vida a los “Compromisos para un Acuerdo Político Nacional”.

Sin embargo, en el PRD el debate continuó hasta la realización de su Tercer Congreso Nacional en agosto de 1995. En aquel entonces el debate se centró en dos orientaciones políticas: gobierno de salvación nacional o transición pactada a la democracia. Cuauhtémoc Cárdenas encabezaba la posición intransigente y Heberto Castillo con Porfirio Muñoz Ledo la posición moderada. En aquella época los traidores eran otros. Finalmente

el Congreso concluyó que “el PRD propone a la nación una transición pactada, pacífica y constitucional hacia la democracia, que nos permita solucionar la crisis que aqueja al país y lo coloque en una posición de alcanzar su futuro con soberanía y justicia para todos...” (Resoluciones del III Congreso Nacional del PRD).

La disposición a los acuerdos y la determinación de la izquierda a pactar muy importantes reformas en el primer trienio del gobierno de Zedillo, aunado a la crisis económica –producto del “error de diciembre”– rindieron sus frutos en las elecciones federales de 1997: conquistó el gobierno de la ciudad de México y recuperó la segunda posición en el Congreso que la había perdido en 1991 y 1994. La transición a la democracia había concluido, dicho en los términos de Juan J. Linz, la transición termina “cuando los intereses organizados y los principales actores políticos consideran que las instituciones democráticas son las únicas que pueden llevarlos al poder” (citado por Georg Sorensen en Oposición y Democracia. Soledad Loaeza. Cuadernos de Divulgación Democrática).

Dicho en otras palabras, las reglas del viejo régimen para acceder al poder se modificaron con las reformas venidas desde atrás y con las pactadas en el primer trienio del sexenio de Zedillo, alcanzándose a diseñar un régimen sustancialmente democrático. El objetivo principal del PRD se había alcanzado y los excelentes resultados de 1997 habían demostrado lo certero de su línea política.

Es importante señalar que la moderación no siempre resulta mejor que la intransigencia, todo depende de la situación política o coyuntura. Empero está demostrado, como dice Bobbio, que “Frente al fascismo y al nazismo hubo que comportarse como extremistas, escogiendo entre resignarse y resistir. Y no dudo que fueron los extremistas de entonces los que llevaron razón. Pero en una sociedad democrática, pluralista, donde existen varios grupos en libre competición, con reglas del juego que deben ser respetadas, mi convicción es que tienen mayor posibilidad de éxito los moderados (...) Guste o no guste, las democracias suelen favorecer a los moderados y castiga a los extremistas.” (Citado por Juan Arias. Roma 01/06/1991. El país.com).

Y añade: “Quien quiere hacer política día a día debe adaptarse a la regla principal de la democracia, la de moderar los tonos cuando ello es necesario para obtener un fin, el llegar a pactos con el adversario, el aceptar el compromiso cuando éste no sea humillante y cuando es el único medio para obtener algún resultado”.

Esta es una máxima Bobbiana que la izquierda que presume de ser democrática aún no la comprende ni la asimila. Nuestra izquierda sigue sin entender que se debe a la democracia y que es parte de las instituciones del régimen constitucional, las cuales son reformables, pero a través de los propios órganos de representación.

Existe otro problema muy serio al seno de las filas perredistas. Tienen una lectura de la realidad del país de hace 40 años. Hemos escuchado y leído a prominentes dirigentes decir que el país se debate entre la democracia y el autoritarismo, como en la época de Díaz Ordaz. La derrota de AMLO lo ven como un retroceso para el país, que existe una involución de la democracia y una derechización del país. La actuación del ejército en la lucha contra el narcotráfico lo observan como el impulso de una política de endurecimiento en contra de la oposición. Sólo falta que se diga que la vía democrática para acceder al poder se está cancelando. Tienen que serenarse porque de esa lectura se están sacando conclusiones erróneas y marginándose de la toma de decisiones en temas que son del interés general.

Las oportunidades perdidas

Todo parecía indicar que las condiciones se estaban creando para que el PRD conquistara la presidencia de la República en el año 2000. Las tendencias así lo marcaban, empero, nuevamente se presenta un retroceso en su línea política. La disputa se vuelve a personalizar entre Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas, en un primer momento conteniendo ambos por la candidatura del PRD al gobierno del DF, y en un segundo momento siendo coordinador de la segunda fuerza parlamentaria en el Congreso de la Unión el primero, y Cuauhtémoc Cárdenas que se estrenaba como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Desde el Congreso Muñoz Ledo pugnaba por un nuevo pacto de reformas y Cuauhtémoc Cárdenas prefirió nadar de muertito al frente del gobierno. Grave error -más allá de la guerra mediática en contra de su gobierno- haber dejado a un lado la vocación reformadora del partido que le había rendido frutos. Por cierto, desde el Congreso de la Unión su rival interno ya tenía amarrado un acuerdo de gran trascendencia para el Distrito Federal: la municipalización de las Delegaciones Políticas y mayores facultades al Ejecutivo y Legislativo locales. Cuauhtémoc Cárdenas bloqueó la reforma.

De la lección de 1994, donde el PRD y su candidato aparecieron como extremistas sin vocación democrática, que menospreciaron la batalla mediática, en el año 2000 consideraron que la plataforma del DF era suficiente para conquistar la presidencia de la República. Esa maldita creencia de la izquierda de que la razón siempre nos asiste y la arrogancia de no ceder ante el hecho innegable de que Vicente Fox era el que tenía mayores posibilidades de ganarle al PRI en el año 2000, llevó al PRD a dejar pasar la oportunidad histórica de instalar un gobierno de coalición entre el PAN y el PRD, de la misma forma como se desaprovechó la posibilidad de cogobernar desde el Congreso en el último trienio del gobierno de Zedillo.

Por cierto, años después Andrés Manuel López Obrador reconoce en su libro *La mafia nos robó la Presidencia* que a él lo convencieron para que fuera candidato del partido en el DF, "con el argumento de que podía perderse la presidencia de la República, pero teníamos que asegurar el triunfo en la Jefatura de Gobierno." (pág. 94). Aún así la coalición encabezada por el PRD se mantuvo en una posición sectaria e intransigente.

Ya Instalado el nuevo gobierno de la Alternancia, la izquierda nunca valoró en su justa dimensión la importancia capital de haber echado al PRI de los Pinos; mientras Vicente Fox se regodeaba por su triunfo, el PRD se lamía sus heridas, dejando pasar, nuevamente, la oportunidad de insistir en un nuevo pacto de gran relevancia que significara profundizar los cambios democráticos e ir desterrando algunas reglas, aún intactas, del viejo régimen.

De ser la segunda fuerza política en 1997 el PRD pasó a ser, nuevamente, la tercera fuerza política en el 2000 y en el 2003. Han pasado 11 largos años sin que la izquierda demuestre su vocación democrática y reformadora, excepto en algunas entidades de la República como el DF. Las nuevas reglas del juego y las nuevas instituciones creadas y decididamente impulsadas por el PRD y el PAN desde la oposición, han sido correctamente aprovechadas por la derecha panista y, hasta cierto punto, por la derecha priista.

Siendo López Obrador Jefe de Gobierno del DF en ningún momento fue de su preocupación incidir por alcanzar acuerdos en el Congreso y tratar las asignaturas pendientes, ya no digamos a nivel federal sino, por lo menos, a nivel de la ciudad capital, para profundizar su vida democrática. Su mira siempre estuvo en conquistar la presidencia de la República, con las reglas e instituciones que él mismo avaló siendo presidente de su partido. AMLO tuvo la fijación -y la sigue teniendo- de que era suficiente ser pre-

sidente de la República para, desde ahí, cambiar los males de este país. Es una vieja idea y práctica que era vigente cuando el PRI era el partido único y/o dominante, pero que ya no corresponde al actual régimen plural de partidos, donde ninguno de ellos, desde 1988, ha alcanzado a obtener una mayoría calificada para hacer modificaciones constitucionales.

No obstante, Obrador volvió a colocar al perredismo como la segunda fuerza política del país. Sin embargo, el predominio de la intransigencia a su interior lo convierte, por enésima vez, en un partido anti sistema, dejándole al PRI el papel de partido-bisagra garante de la gobernabilidad y, de paso, brindándole la oportunidad de volver a los Pinos. El rechazo por sistema a cualquier reforma que provenga del Ejecutivo Federal y la insistencia de Obrador de priorizar su movimiento de resistencia civil, si no sucede otra cosa, arrastrará al perredismo a ser, nuevamente, la tercera fuerza política del país. Otra oportunidad perdida.

Partido o movimiento

Desde que Cuauhtémoc Cárdenas ejercía su liderazgo carismático y divino, en el PRD ya se venía cuestionando el peso de las personalidades a su interior. Quienes iniciaron la crítica sobre la forma y fondo de cómo operaba el partido terminaron por retirarse del mismo: José Woldenberg, Pablo Pascual Moncayo, Adolfo Sánchez Rebolledo, entre otros; en los albores del año 2000 se retiraron otros destacados dirigentes como el propio Muñoz Ledo y Gilberto Rincón Gallardo. Todos ellos acusados en su momento de traidores y de servirles a la derecha. La transformación de Porfirio es lo que nos sigue sorprendiendo.

Otro de los prominentes críticos del culto a la personalidad que aún milita en el partido, Arnaldo Córdova, decía en 1998 a propósito de la recién propuesta que Obrador hacía respecto a que el PRD tenía que ser un Partido-Movimiento, “El movimientismo es nada más ni nada menos que vil populismo, de la peor ralea. Pura demagogia que no se aviene con los ideales democráticos que siempre han estado en la base del desarrollo de esta gran organización política. Este es un partido político y como tal debe asumirse ante todo.” Y reclamaba que los movimientistas no saben lo que es un partido político o no quieren que lo seamos de verdad. Esa dicotomía, entre partido y movimiento deberíamos de arrumbarla, por innecesaria y por confusionista...” (El Desarrollo del PRD. Foros de Discusión Rumbo al IV Congreso Nacional 1ra. Edición, marzo de 1998. CEN del PRD).

Aunque sorprende que hoy el maestro Córdova se resigne “a aceptar que vivo en una realidad que me precedió y que, por tanto, yo no tuve oportunidad de moldear a mi gusto. Está allí y debo vivir en ella. La izquierda nunca será como yo quisiera que fuera; la izquierda es lo que es y punto... La izquierda real está allí: pelada, maloliente, malhablada, provocadora, violentita a veces, inculta, sin valores éticos, oportunista, corrupta, a veces traidora, incapaz de hacer tratos, sin programa cierto, sin verdaderas alternativas que ofrecer.” (“La izquierda tal como es”. La Jornada. 3 de febrero de 2008).

El peso y control que ejercen los líderes providenciales en el perredismo y la determinación de crear movimientos alternos al mismo, no sólo minan la vida interna del partido, sino que se convierte en una fuerza proclive a minar las instituciones democráticas del país y a tejer una relación corporativa y clientelar con la sociedad, que termina por reproducir una cultura paternalista y autoritaria. A diferencia del socialismo democrático que le interesa crear ciudadanía y una nueva cultura cívica, a la izquierda pre-democrática le interesa organizar al pueblo y representarlo a través de líderes providenciales y caciquiles, que terminan siendo dirigentes y representantes populares del partido.

Acertadamente Roger Bartra señala que “el populismo suele enfatizar la importancia de los movimientos sobre los partidos políticos, afirma que la principal fuente de cambio se encuentra en la movilización popular, exalta la relación directa entre los jefes políticos y sus bases sociales en acciones de protesta”. Sin embargo, “la izquierda democrática generalmente exalta la función de los partidos políticos, los reconoce como eslabones fundamentales del sistema constitucional democrático, enfatiza la importancia de acceder al poder sobre los actos de protesta, reconoce la necesidad de estabilizar los mecanismos de representación mediante procesos electorales y auspicia el fortalecimiento de las instancias parlamentarias” (Fango sobre la democracia. Edit. Planeta).

No está por demás recordar el menosprecio que López Obrador mantuvo sobre su partido durante la campaña presidencial y que a la postre fue una de las causas de su derrota, que narran de una forma muy amena y objetiva los periodistas Óscar Camacho y Alejandro Almazán (La victoria que no fue. Edit. Grijalbo), a los cuales, por cierto, no se les puede acusar de anti-perreditas o que son parte de la derecha. En sus páginas narran, entre tantas anécdotas de interés, que López Obrador “no tenía

reparo en cuestionar para externar: La izquierda vale madres” (pág. 82), cuando desde el partido ponían en duda la eficiencia de sus Redes Ciudadanas.

Estos y otros dilemas que el PRD no termina por resolver, lo ha llevado a que en más de una ocasión y en diferentes coyunturas, diversos dirigentes llegan a plantear la urgente necesidad de refundar al partido. Durante la grave crisis propiciada por la corrupción que se dio durante la presidencia de Rosario Robles y que involucró a muchos dirigentes connotados, el PRD tuvo la oportunidad de renovarse. No fue así, prefirió enterrar, al viejo estilo priista, todas las pruebas y las conclusiones que sus comisionados habían recomendado. La purga y la “renovación” la limitaron a ciertas expulsiones y renunciadas.

Previo al último Congreso Nacional, nuevamente se habló de la necesidad de refundar al partido. Tanto Alejandro Encinas como Jesús Ortega, hoy principales contendientes a suceder al gris presidente Leonel Cota plantearon su disposición a impulsarla, aunque a decir verdad nunca dijeron ni han dicho la forma en cómo alcanzarla. Sólo hay de dos: o a través de un proceso intenso de reformas internas, con tiempos establecidos; o a través de su disolución convocando, al mismo tiempo, a la creación de una nueva fuerza política de izquierda, con nuevas reglas, programa y dirigentes. La sugerencia del senador Carlos Navarrete de que el FAP se convierta en un nuevo partido fue vista más bien como un posicionamiento mediático para salirle al paso a quienes se opusieron a los cambios en materia de coaliciones; y si hubiese sido una propuesta sería –tomada así al vapor– lo único que se estaría logrando con una fusión de los partidos integrantes del FAP sería la multiplicación de los vicios y la reedición de una izquierda nacionalista, dogmática y clientelar.

Una refundación de la izquierda atraviesa por un deslinde –cultural, político e ideológico– con las prácticas que reproducen los vicios del viejo régimen priista; atraviesa por la creación de un partido de ciudadanos, donde los militantes tengan en realidad los mismos derechos y deberes, donde se reconozca la trayectoria, la capacidad y las convicciones. Implica una refundación y deslinde de planteamientos programáticos que más bien parecen mantras que repiten al unísono; se trata de deslindarse de las propuestas, como dice Carlos Fuentes, que “se parecen demasiado a las de la vieja izquierda nacionalista, hambrienta de un macroestado, grande por su tamaño aunque pequeño por su eficiencia. Renuente a aprovechar las ventajas del mundo moderno e incli-

nada a condenarlas en bloque como parte de un complot contra la nación, exonerante de las dictaduras extranjeras si se dicen de izquierda...” (Carlos Fuentes. 15 de enero de 2002. Reforma.)

El propio Epigmenio Ibarra, al que Martí Batres no lo podrá acusar de ser un teórico de la “izquierda moderna” o como “intelectual de la derecha” ni de “injerencista” en la elección del PRD (“La disputa por el PRD”. El Universal, 23 de enero de 2008), señala con justa preocupación que “no hay norte que oriente la acción y la izquierda, ahora, compartiendo el poder, debe reinventarse. Es esto urgente y vital para el país. Necesitamos el contrapeso de una izquierda lúcida y poderosa. (“La izquierda y sus yerros”. 29 de febrero de 2008. Milenio)

Las elecciones internas del 16 de marzo

Todas y cada una de las elecciones internas del PRD padecen un mal endémico: poca legitimidad. Las reglas establecidas en sus estatutos y su reglamento de elección no son garantía –como de antaño no lo era el órgano electoral federal y el padrón electoral en las elecciones constitucionales– de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad. Y si a ello le agregamos que el órgano encargado de sancionar la violación de las normas (Comisión Nacional de Garantías) sólo se limita a realizar exhortos, el cuadro se completa.

El pasado X Congreso Nacional no fue al fondo del problema. La sustitución del Comité de Servicio Electoral por la Comisión Técnica Electoral y la “nueva” Comisión de Afiliación, en la práctica no resuelven los graves problemas del pasado inmediato.

Una reforma de fondo en esta materia tendría que abordar una modificación de la Ley Electoral para que el IFE sea la instancia que organice y regule las elecciones primarias al interior de los partidos, que incluiría la verificación del padrón de afiliados. Además, se debe cambiar el sistema de afiliación y acreditación de la militancia, que promueva la previa capacitación con sus respectivas evaluaciones, así como la meritocracia, conjugado con un periodo de simpatía y un sistema de carrera partidaria. Hay que terminar de tajo, con lo que señala Pablo Gómez: que en lugar de tener militantes se cuenta con asalariados políticos, de tal forma que los activistas pagados desplazan a los activistas por convicción. Y como él mismo dice, desde que el PRD se convierte en fuerza gobernante se promueve un sistema de venta de plazas por los favores recibidos. (Entrevista por el Universal TV).

Desde que se estableció el voto universal para elegir a los dirigentes y candidatos a puestos de elección popular (sistema que en sí es correcto), prácticamente todas las elecciones para elegir dirigentes nacionales han sido cuestionadas. De todas dos han llamado mucho la atención. La primera es cuando López Obrador salió electo presidente del partido, en el año 1996. En esta elección López Obrador arrolló a sus contrincantes: Heberto Castillo, Amalia García y Jesús Ortega. Pero vaya paradoja, en los corrillos de Monterrey 50 todo mundo se indignaba y se mofaba de la “operación pescado” que aplicó el Tabasqueño en su tierra natal. Solamente con la votación de ese Estado fue más que suficiente para que Obrador conquistara la presidencia. Las irregularidades fueron muy evidentes para anular las elecciones, pero no fue posible porque la diferencia era enorme y los contrincantes fueron incapaces de reunir y presentar las pruebas.

La otra elección fue la de marzo de 1999 donde compitieron, entre otros, Amalia García, Jesús Ortega y Rosa Albina Garavito. Fue un verdadero cochinerito. Esta última, a la cual no se le puede cuestionar su honestidad intelectual ni política, nos recuerda hoy cómo la dirección nacional fue complaciente y que la resolución de la Comisión de Garantías y Vigilancia de castigar a los responsables del fraude interno nunca se cumplió. (“Mi Regreso”. El Universal. 7 de febrero de 2008).

La dirección nacional era encabezada por López Obrador “que no aguantó” seguir al frente de su partido, asumiendo la presidencia interina Pablo Gómez (Marzo-Agosto de 1999) bajo la promesa del primero y de otros dirigentes de que el actual senador iba a ser apoyado para ser candidato del partido al gobierno de la ciudad, en las elecciones constitucionales del 2000. Ya todos sabemos qué sucedió después.

Hoy, el grado de confrontación entre los principales candidatos a suceder a Leonel Cota es muchísimo mayor que en aquellas contiendas. Es verdaderamente insólito que un partido político en este país tenga como afiliados al 10 por ciento de ciudadanos de la lista nominal (7 de 70 millones). Ya lo expresó el presidente de la Comisión de Afiliación, Mauricio del Valle, “quien ha llegado apenas ayer a este partido evidentemente no sabe y piensa que es un padrón maravilloso, pero no es así...” (2 de marzo de 2008. Crónica). Y si a esto le agregamos la infinidad de anomalías que han sido denunciadas por todos los candidatos, sin que se tomen las medidas preventivas y correctivas al respecto la situación se complica aún más.

Son dos las salidas que se han propuesto para evitar el riesgo de una ruptura y/o crisis del perredismo como resultado de las elecciones del 16 de marzo. Una de Camilo Valenzuela que propone la posposición de las elecciones y la otra que propone Manuel Camacho Solís, que todos asuman el compromiso (se entiende que independientemente de las irregularidades que se presenten en las elecciones) de “reconocerse a quien gane”. (“PRD: La hora decisiva”. 3 de marzo de 2008. El Universal). Ambas no resuelven el fondo del problema al que ya hemos hecho referencia, sencillamente lo posponen o se guarda debajo de la alfombra.

Quien llegue a ser el próximo presidente del PRD, se mantendrá atrapado por las resoluciones del X Congreso Nacional y por las decisiones del movimiento de resistencia civil de López Obrador y del FAP. El partido seguirá oscilando entre la moderación y la intransigencia, lo que al fin de cuentas puede resultar un serio retroceso de la izquierda en el 2009. La apuesta del “presidente legítimo” es por la agudización de las contradicciones, frótándose las manos para que se den como producto de una grave crisis económica o como producto de graves errores del Gobierno Federal. No hay interés por la gobernabilidad del país. ■

nachopinacho@yahoo.com.mx



Del Prado